



HAL
open science

Perú: la difícil cohabitación democrática

Gustavo Pastor

► **To cite this version:**

Gustavo Pastor. Perú: la difícil cohabitación democrática. Les Études du CERI, 2019, 239-240, pp.31 - 35. hal-03579307

HAL Id: hal-03579307

<https://sciencespo.hal.science/hal-03579307>

Submitted on 18 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Perú: la difícil cohabitación democrática

Gustavo Pastor

El Perú se encuentra experimentando un difícil aprendizaje democrático, que implica continuar modernizándose como país, bajo un contexto de conflictiva convivencia política entre el partido de gobierno, Peruanos Por el Cambio (PPK¹), y el partido opositor Fuerza Popular, heredero del capital electoral del ex dictador Alberto Fujimori. Este antagonismo refleja la confrontación de dos sensibilidades políticas que han dominado la historia política peruana de las últimas tres décadas: el fujimorismo y el anti fujimorismo. Nosotros explicaremos, en este texto, los momentos más importantes de esta difícil cohabitación durante los primeros dos años de gobierno del partido PPK.

La fragilidad política de Pedro Pablo Kuczynski

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue elegido presidente en el 2016 luego de una agitada campaña electoral. Gracias al apoyo electoral del antifujimorismo, Kuczynski consiguió vencer a Keiko Fujimori por apenas 41 438 votos de diferencia. Sin embargo, el gobierno Kuczynski se vio confrontado a una oposición mayoritaria en el Congreso (73 de los 130 escaños), decidida a vengarse de las heridas abiertas durante la campaña electoral, buscando entorpecer sistemáticamente las acciones del gobierno.

De hecho, la fragilidad de Kuczynski se explica también en parte a su personalidad y a una serie de errores políticos cometidos, pues, su excesiva confianza lo condujo muchas veces a realizar diversas declaraciones que complicaron a su propio gobierno.

Paralelamente, la actitud belicosa del fujimorismo se inscribía en el marco de una estrategia política de boicot de las iniciativas del gobierno, desprestigiándolo ante la opinión pública, buscando denunciar su ineficacia en medio de un contexto convulsionado por los conflictos sociales, los desastres medioambientales (principalmente los derrames de petróleo en la Amazonía), las constantes huelgas, la inseguridad ciudadana, etc.

A pesar de las complicadas relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, se logró mantener un margen mínimo de negociación política. Así, el Congreso otorgó su confianza al gobierno, delegándole incluso puntualmente algunas facultades legislativas y votando algunas de sus leyes, sobre todo en materia económica. A cambio, el fujimorismo recibió una serie de puestos directivos en algunas instituciones del Estado, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Defensoría del Pueblo (institución independiente encargada de proteger los derechos constitucionales), o el Banco Central de Reserva. A cada nominación, el presidente Kuczynski apareció bastante débil ante la oposición, sin duda, porque sus prácticas democráticas no estaban adaptadas para lidiar con el agresivo autoritarismo del fujimorismo. A pesar de las negociaciones, la oposición continuó interpelando ministros. En diciembre del 2016, el ministro de Educación (Jaime Saavedra) fue censurado y tuvo que abandonar sus funciones.

¹ Las iniciales de este partido político corresponden a las de su fundador Pedro Pablo Kuczynski.

Los constantes enfrentamientos entre estos dos poderes llevaron incluso al Cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani, a proponer su intermediación. Un encuentro efectivamente tuvo lugar en su domicilio, pero ello no evitó que la guerra continuara, e incluso se intensificara con las revelaciones del escándalo Odebrecht en enero del 2017. Este escándalo tuvo importantes repercusiones en el Perú, pues fue comprometiendo a numerosos líderes políticos, empresarios y altos funcionarios, además de contribuir también al enfriamiento del crecimiento económico, en la medida en que se paralizaron grandes proyectos de infraestructura. Entre los dirigentes políticos, el primer implicado fue el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de la Carretera Interoceánica. Este último, se encuentra actualmente residiendo en Estados Unidos, por lo que enfrenta un proceso de extradición en su contra. Igualmente, las confesiones de Marcelo Odebrecht permitieron conocer el financiamiento ilegal de las campañas electorales de los presidentes Alan García (2006) y Ollanta Humala (2011), o también el de la candidata Keiko Fujimori (2011) y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (2013). Una investigación preliminar condujo incluso a la encarcelación preventiva de Humala y su esposa Nadine Heredia entre julio del 2017 y abril del 2018.

El presidente Kuczynski se vio también involucrado en este escándalo cuando Marcelo Odebrecht declaró que su empresa lo había contratado como consultor después de su participación en el gobierno Toledo. Bien que él negó estas acusaciones, la prensa se concentró en investigar los negocios del presidente, en el mismo momento en que el fenómeno climático El Niño provocaba importantes estragos en distintas zonas del país entre marzo y abril 2017².

El fujimorismo explotó claramente las dificultades de Kuczynski empujando a la renuncia de su ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente, Martín Vizcarra, en mayo del 2017, después de haberlo acusado de firmar un contrato para la construcción del nuevo aeropuerto del Cuzco que perjudicaba al Estado. En junio del mismo año, el ministro de Economía (Alfredo Thorne) se vio obligado a renunciar al verse implicado en una conversación telefónica donde intentaba influenciar al Contralor de la República para que facilitara la construcción de ese mismo aeropuerto.

El fujimorismo atacó después a la nueva ministra de Educación, acusándola de no haber sabido manejar la huelga de maestros que había durado cuatro meses. Esta vez, sin embargo, el presidente decidió la confrontación, al plantear una cuestión de confianza en el parlamento en torno a su política educativa. El voto terminó con la destitución de todo el gabinete Zavala, pero como lo señala la Constitución, el presidente contaba ahora con la posibilidad de disolver el Congreso en caso hubiera una nueva censura.

El cambio de presidente

El presidente Kuczynski designó un nuevo gabinete de ministros dirigido por la parlamentaria y segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, buscando que esta última pudiera mejorar las

² Según las declaraciones del ministro de Defensa Jorge Nieto, el Niño había producido importantes daños materiales y humanos, dejando 101 fallecidos (*Perú 21*, 3 de abril del 2017).

relaciones con el Congreso. De todos modos, el perfil tecnocrático de este segundo gabinete, compuesto nuevamente por buenos técnicos, pero con poco manejo político, no facilitaron las relaciones con el parlamento.

Paralelamente, el gobierno y algunos congresistas (liderados por Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori) negociaban discretamente bajo la mesa la posible liberación del antiguo dictador a cambio de respaldo político. Si la clasificación del Perú a la Copa Mundial de Fútbol en Rusia y la visita del Papa Francisco brindaron un corto descanso al presidente, su situación legal continuó degradándose a medida que avanzaban las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción. Después de haber declarado bajo juramento en el Congreso que nunca había trabajado para Odebrecht, Kuczynski tuvo que reconocer públicamente que su empresa había asesorado financieramente al proyecto H2OImos. Las investigaciones periodísticas mostraron igualmente que su empresa Westfield Capital (así como la empresa Capital One de su socio chileno Gerardo Sepúlveda) habían realizado numerosos trabajos para Odebrecht, lo que implicaba graves conflictos de interés³. La oposición fujimorista en el Congreso aprovechó esta situación para exigir la renuncia inmediata del presidente y de amenazarlo con emprender una destitución por vía parlamentaria si se negaba.

En un primer momento, el presidente Kuczynski pudo contar con el respaldo político de los antifujimoristas. El 22 de diciembre del 2017, los fujimoristas no consiguieron los 87 votos necesarios para destituir al presidente. La izquierda por su parte se abstuvo de votar y sorpresivamente once congresistas de Fuerza Popular, con Kenji Fujimori a la cabeza, votaron contra.

Dos días después, el presidente cometió un nuevo error que le hizo perder sus últimos respaldos políticos. En efecto, indultando a Alberto Fujimori por “razones humanitarias” (en Navidad), Kuczynski provocó una reacción unánime de todos los defensores de los derechos humanos en el país, provocando su inmediata ruptura con el antifujimorismo. Varios ministros decidieron renunciar y la izquierda, empujada por la indignación y las marchas ciudadanas contra el indulto, aprovechó para interponer una nueva moción de censura contra el presidente en el parlamento.

Aislado, Kuczynski continuó agravando su situación al tratar de jalarse más congresistas fujimoristas a la facción liderada por Kenji Fujimori, prometiéndoles jugosos contratos de infraestructura para sus regiones. Obviamente, el fujimorismo aprovechó esta situación para organizar una emboscada política, donde el congresista Moisés Mamani (de Puno), y otros congresistas fujimoristas de provincias, se mostraron “interesados” en aceptar las propuestas del gobierno, para filmar una serie de conversaciones en las que se evidenciaban las condenables prácticas políticas promovidas por el Ejecutivo. De esta manera, el 21 de marzo del 2018, el fujimorismo presentó en conferencia de prensa estas grabaciones, provocando una masiva indignación ciudadana, que obligó al presidente Kuczynski a renunciar ese mismo día.

³ Estos datos fueron revelados por el reporte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue entregado a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República.

El nuevo estilo del presidente Vizcarra

El vicepresidente Martín Vizcarra ocupaba sus funciones de embajador en Canadá cuando fue llamado para asumir la presidencia. De hecho, Vizcarra fue percibido en un primer momento como un posible colaborador de la caída de Kuczynski, al haberse negado a renunciar a su puesto de primer vicepresidente. Igualmente, sorprendió la designación de César Villanueva (el principal impulsor del segundo pedido de censura) como primer ministro, así como la designación de Salvador Heresi (el primer colaborador cercano a Kuczynski en haber pedido su renuncia) como ministro de justicia. Por lo que, Vizcarra inició su gobierno bajo la hostilidad de sus propios compañeros de partido, mostrándose bastante conciliador con las otras fuerzas políticas.

Sin embargo, las relaciones de Vizcarra y su base parlamentaria se fueron mejorando rápidamente a medida que se degradaban las relaciones con la oposición fujimorista. En las calles, las marchas contra el indulto a Fujimori no pararon. La corrupción también fue denunciada por los manifestantes, comenzando a difundir el slogan “que se vayan todos”, inventado en Argentina en 2001. La huelga de los maestros se intensificó, así como también aparecieron otros motivos de insatisfacción: la masiva llegada de inmigrantes venezolanos y los efectos del enfriamiento económico, que provocaron la renuncia del ministro de economía David Tuesta. Los fujimoristas, por su parte, suspendieron a Kenji Fujimori y a su grupo parlamentario por haber intentado quebrar la unidad de la mayoría parlamentaria.

Durante los dos primeros meses de su mandato, Vizcarra no parecía seguir una estrategia precisa, mostrándose demasiado conciliador con su autoritaria oposición, lo que hizo que bajara su popularidad. En dos meses, su tasa de desaprobación pasó de 19% a 44%⁴.

En julio, un nuevo escándalo de corrupción estalló, esta vez en las altas esferas judiciales. Diversas grabaciones (hechas a un grupo de jueces) fueron difundidas en las que se ponían en evidencia diferentes prácticas ilícitas como la negociación de las penas de cárcel a cambio de dinero o la manipulación de concursos públicos para la designación de jueces corruptos, provocando nuevamente la indignación de la opinión pública en todo el país.

La prensa se ocupó durante semanas de tratar sobre este escándalo de corrupción, a partir de cientos de audios disponibles. Las relaciones existentes entre algunos dirigentes políticos y los más altos funcionarios del Poder Judicial (que intercambiaban respaldo político por impunidad judicial) fueron puestos en evidencia ante la opinión pública. De hecho, el escándalo Lava Juez provocó la destitución de prácticamente todos los implicados en los audios: la renuncia del ministro de Justicia (Salvador Heresi), la salida de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ente encargado de nombrar y destituir jueces), la renuncia del presidente del Poder Judicial (Duberlí Rodríguez), la prisión preventiva para una buena parte de los implicados en la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, etc.

Este escándalo de corrupción fue también devastador para los fujimoristas. La sospechosa actitud del fujimorismo que protegió a ciertos jueces y fiscales, supuestamente implicados en esta red de corrupción (sobre todo al fiscal de la Nación Pedro Chávarry y al juez superior

⁴ Según la encuesta realizada por Pulso Perú para la revista Gestión (el 8 de junio del 2018).

César Hinostroza), provocó un rechazo generalizado de la opinión pública. El presidente Vizcarra cambió de actitud con el fujimorismo, intentando conectar con el descontento popular, gracias a su estilo dinámico, firme y cercano a la población, por lo que tomó la lucha contra la corrupción como bandera política, buscando fortalecer políticamente al Ejecutivo. En un discurso pronunciado a la ocasión de “fiestas patrias”, el presidente sorprendió anunciando que emprendería una profunda reforma del Poder Judicial. Asimismo, propuso cuatro iniciativas de reforma política que debían ser aprobadas por el Congreso, para luego ser aprobadas vía referéndum. Bien recibidas por la población, estas iniciativas hicieron aumentar progresivamente la aprobación del presidente en los próximos meses de 39% a 61%⁵. A partir de este momento, Vizcarra continuó presionando al parlamento para que aprobara sus proyectos: reforma del poder judicial, financiamiento de partidos políticos, regreso a la bicameralidad y prohibición de la reelección inmediata de los congresistas.

Dos meses más tarde, animado por el respaldo popular, el presidente decidió de interponer una cuestión de confianza al parlamento en torno a la aprobación de sus cuatro reformas. El 17 de septiembre, el Congreso, amenazado por su posible cierre, decidió aceptar las reformas. Igualmente, la presión sobre el fujimorismo continuó en octubre, cuando un juez anuló el indulto del ex presidente Alberto Fujimori y ordenó su regreso a prisión.

En las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre 2018, los fujimoristas cosecharon los primeros resultados de su impopular estrategia de obstrucción. Su candidato por la municipalidad de Lima apenas alcanzó el 2% de votos y Fuerza Popular ganó apenas dieciséis autoridades municipales sobre un total de 1800 en todo el país⁶. Tres semanas más tarde, Keiko Fujimori fue detenida preventivamente por treinta y seis meses dentro del marco de una investigación sobre el financiamiento ilícito de su campaña por Odebrecht.

En definitiva, nadie sale ganando de la continua crispación política que ha experimentado el Perú entre 2017-2018. Sin embargo, esta última ha contribuido a socavar la democracia peruana, que tiene una de las tasas más bajas de aprobación ciudadana en América Latina⁷. Las autoridades políticas han demostrado una gran inmadurez política, preocupándose principalmente por la defensa de sus propios intereses, antes que buscando resolver los graves problemas que enfrentan los electores peruanos. Por esta razón, es necesario que este complicado aprendizaje democrático permita a las diferentes fuerzas políticas llegar a un cierto nivel de concertación, que brinde una mayor gobernabilidad al Perú (durante los dos años y medio que restan del gobierno Vizcarra).

⁵ Según la encuesta de Ipsos Perú del 12 de octubre del 2018, la popularidad de Vizcarra subió de 35% en junio, a 46% en agosto, llegando a 61% en octubre.

⁶ Según los datos de ONPE.

⁷ Véase los estudios de los últimos años del proyecto LAPOP de la Universidad Vanderbilt (EEUU).